

Santiago, trece de enero de dos mil veintitrés.

**VISTOS:**

En estos autos Rol N° 10.055-22 de esta Corte Suprema, caratulados “Benedicto Poo Álvarez”, por sentencia dictada con fecha once de junio de dos mil veintiuno, por el Ministro en Visita Extraordinario don Álvaro Mesa Latorre, se condenó al acusado Jorge Enrique Schweizer Gómez, a la pena de doce años de presidio mayor en su grado medio y a las penas accesorias legales correspondientes, como autor del delito consumado de secuestro calificado en la persona de Benedicto Poo Álvarez, previsto en el artículo 141 del Código Penal, en su carácter de lesa humanidad, hecho ocurrido en la comuna de Lautaro, el 20 de octubre de 1973.

La misma sentencia acogió, con costas, la demanda civil por daño moral deducida por doña Miriam Rosa Flor Poo, condenando al Estado de Chile a pagar, a título de indemnización de perjuicios, \$50.000.000.

Recurrida de apelación por el sentenciado y por el Fisco de Chile, la Corte de Apelaciones de Temuco, por sentencia de doce de enero de dos mil veintidós, confirmó el fallo de primer grado, con declaración que, en la parte civil, se rebaja a \$30.000.000 el monto de indemnización por daño moral otorgada a doña Miriam Poo Carrasco, manteniendo inalterable la sentencia apelada en todo lo demás.

Contra el aspecto civil del pronunciamiento antes reseñado, la parte demandada Fisco de Chile, dedujo en lo principal de su escrito de fojas 1.852, recurso de casación en el fondo para ante esta Corte Suprema, el que se trajo en relación por decreto de seis de abril de dos mil veintidós, según consta a fojas 1.868.



## **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que la parte demandada Fisco de Chile, en un primer capítulo del recurso de nulidad sustancial, denuncia como infringidos los artículos 2 N° 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Ley 19.123 y artículos 19 y artículo 22 del Código Civil, al haberse rechazado la excepción de exclusión legal de familiares más lejanos o preterición opuesta por el Fisco de Chile al contestar la demanda, incurriéndose en contravención formal por omisión o por falta de aplicación.

Explica que la indemnización por daño moral demandada en autos, se sustenta en que la actora sería prima de la víctima del delito sancionado, en tanto que la Ley 19.123 determinó una indemnización legal, optando por el núcleo más cercanos, esto es, padres, hijos y cónyuge, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, a quienes se les excluyó. Asegura que este principio jurídico, se encuentra consagrado en las disposiciones de la Ley 19.123 cuya vulneración denuncia, desde que desatendiendo el claro sentido y alcance que emana de su tenor literal, se ha desestimado la excepción de preterición opuesta, haciendo lugar a la acción reparatoria deducida en su contra.

En un segundo capítulo del recurso, denuncia la infracción a los artículos 1698, 27, 305 y 309, en relación a los artículos 19 y 22, todos del Código Civil.

Explica que la demandante sostuvo en la demanda tener la calidad de prima de la víctima don Benedicto Poo Álvarez y, sobre la base de ese pretendido parentesco, fundó su legitimación activa en la acción indemnizatoria que ejercita para reclamar el daño moral que dice haber padecido, en calidad de víctima por repercusión, a causa del delito penal de que se trata. Luego, siendo la



demandante quien alega ser acreedora de la obligación indemnizatoria impetrada mediante la acción civil de autos, sobre ella recae la carga de la prueba de la existencia de tal obligación indemnizatoria.

Agrega que a la demandante incumbía acreditar el parentesco invocado para tales efectos, primos, por lo que conforme al artículo 27 del Código Civil, le correspondía acreditar que ambos tienen o proceden de un ascendiente común. Luego, conforme lo previsto en los artículos 305 y 309 del Código Civil, que tienen el carácter de norma reguladora de la prueba, la única forma de acreditar en juicio el parentesco, es mediante la respectiva partida de nacimiento o bautismo, por la correspondiente filiación, o por los instrumentos auténticos mediante los cuales se haya determinado legalmente; a falta de los cuales, sólo puede probarse en el correspondiente juicio de filiación.

Asegura que, al haberse establecido que la actora es prima de la víctima directa del delito, mediante elementos probatorios distintos a los ya referidos, se trasgredieron los artículos 305 y 309 del Código Civil, desde que los certificados de nacimiento y demás certificados de defunción, más el acta de matrimonio de los padres de la víctima, sólo alcanzan hasta los abuelos de la demandante y hasta los padres de la víctima, por lo que no existen medios de prueba, en los términos exigidos en los artículos 305 y 309, que acrediten que la demandante y la víctima del ilícito penal provengan de un ascendiente en común, que según la actora, sería el bisabuelo paterno.

En un tercer capítulo del recurso, se denuncia la infracción de los artículos 1437, 2314 y 578 del Código Civil, artículos 4 y 42 inciso primero de la Ley 18.575 y artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en relación



a los artículos 19 y 22 del Código Civil, también vulnerados como consecuencia de las normas reguladoras de la prueba referidas en el acápite precedente, desde que se ha condenado al Fisco de Chile a pagar una indemnización de perjuicios por daño moral a la actora, pese a que no acreditó la existencia del daño, elemento que resulta esencial para configurarse la responsabilidad extracontractual demandada, declarando un inexistente derecho personal o crédito a favor de la demandante, del que sería acreedora con respecto al Fisco de Chile al que, por consiguiente, le impone la también inexistente obligación indemnizatoria correlativa, inherente a la responsabilidad civil.

Luego de explicar cómo los yerros denunciados influyeron sustancialmente en lo dispositivo de la determinación recurrida, solicita que se anule la sentencia sólo en su parte civil y se dicte el correspondiente fallo de reemplazo, en el que se resuelva específicamente que se revoca la sentencia definitiva de primer grado y, en su lugar, se rechace íntegramente la demanda civil deducida en la presente causa.

**SEGUNDO:** Que, a afectos de un adecuado análisis de la controversia que motiva al presente recurso, se hace necesario dejar asentado, que fueron hechos de la causa en primera y segunda instancia, los siguientes:

“B.- Benedicto Poo Álvarez, agricultor, militante comunista de 41 años,... ese día 20 de octubre de 1973, junto a su conviviente, doña Hilda del Carmen Fuentes Ortega, se dirige a la comuna de Lautaro a efectos de realizar principalmente trámites a la ciudad. Que al llegar a esta, proceden a visitar a don Urbano Poo (fallecido), primo de Benedicto Poo Álvarez.... Que transcurrido un lapso y alrededor de las 11:30 horas la víctima se retira del inmueble, sin



compañía, al centro de la ciudad a efectos de realizar las diligencias por las cuales se encontraba en aquella.

C- Que alrededor del mediodía y mientras Benedicto Poo Álvarez transitaba por el centro de Lautaro, esto es por la calle O'Higgins, es detenido por una patrulla de Carabineros perteneciente a la 1° Comisaría de Lautaro; los que lo introducen en la parte trasera del vehículo el cual se disponía a avanzar. Que en ese momento doña Myriam Poo Carrasco, sobrina de Benedicto e hija de don Urbano Poo, quien se encontraba circulando precisamente por el centro de la ciudad, escucha la voz de su tío quien desde el interior de un vehículo en movimiento le grita "Myriam, avísale a mi tío que me llevan los Carabineros...".

[...]

F.- Que tras los episodios descritos precedentemente, los familiares de la víctima jamás volvieron a tener noticia acerca de su paradero, manteniéndose en la actualidad el relato existente en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el que da cuenta de su desaparición tras la detención de aquel día 20 de octubre del año 1973..."

En razón de lo anterior, Miriam Rosa Poo Carrasco, demanda al Fisco de Chile por la suma total de \$100.000.000 (cien millones de pesos), por concepto de daño moral, por la pérdida de su primo, y haber vivido la tristeza de su padre Urbano Poo.

**TERCERO:** Que, de la misma forma, conviene reseñar que la demandante civil, fundó su pretensión indemnizatoria, argumentando que el vínculo familiar que la une a Benedicto Poo Álvarez le otorga legitimidad para accionar civilmente.



Explica que la familia Poo es de origen Suizo y su bisabuelo Adolf Johan Boo Stiegler, llegó a Chile el 02 de octubre de 1885 junto a su esposa Fridolina Jager y sus hijos, entre ellos, José Boo Jager y Urbano David Boo Jager. El primero de ellos, contrajo matrimonio con Eudocia González Viñuela y de dicha unión nacieron nueve hijos, entre los que está José Manuel Boo González que es padre de Benedicto Poo Álvarez, víctima de ilícito que ha sido sancionado en este proceso. Por su parte, Urbano David Poo Jager contrajo matrimonio con doña Rosaura González Viñuela, unión de la que nacieron doce hijos, entre ellos Urbando Segundo Poo González que es padre de la demandante, por lo que asegura que Benedicto es su primo. Aclara que el apellido en Chile fue registrado como Poo y como sus bisabuelos nacieron en Suiza, no cuenta con certificados emitidos por el Registro Civil e Identificación de sus nacimientos, matrimonio, como tampoco el de sus hijos. Señala que estos antecedentes, más certificados que se acompañan, permiten demostrar el vincula familiar que la une a Benedicto Poo Álvarez y que la legitiman para comparecer en este juicio.

Al contestar la demanda, el Fisco de Chile opuso excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandada, para el caso de acreditarse el parentesco invocado por la actora, por preterición legal de la demandante en la calidad de prima que invoca, y por haber sido compensada en conformidad a las leyes de reparación. Además alegó que la actora no ha acreditado el parentesco que se atribuye de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 305 y siguientes del Código Civil, lo que obsta a la legitimación activa en la acción resarcitoria por daño moral demandado, por lo que solicitó el rechazo de la acción impetrada.



**CUARTO:** Que, sobre la base de los presupuestos consignados precedentemente, y en lo que guarda relación con el recurso de marras, la Corte de Apelaciones, haciendo propios los fundamentos de la sentencia de primer grado, confirmó la decisión de rechazar las excepción de preterición y de falta de legitimación activa opuestas por el demandado.

Al efecto, el sentenciador de la instancia, en el fundamento 28 A, desechó la excepción de preterición, por estimar que las leyes referidas por el demandado, no resultan atingentes a la materia, como tampoco limitan el derecho de los familiares de víctimas de violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el régimen militar, a obtener reparación integral de daño sufrido, haciendo referencias a diversas sentencias dictadas por tribunales superiores de justicia sobre la materia, que deciden en el mismo sentido.

En tanto que la excepción de falta de legitimación activa también fue desestimada, teniendo en consideración que de la prueba documental acompañada por la actora (consistente en el certificado de nacimiento de la demandante, que registra como padre a Urbano Segundo Poo González, certificado de nacimiento de Urbano Segundo Poo González, el que registra como padre a Urbano Poo, certificado de nacimiento de Benedicto Poo Álvarez, que registra como padre a José Manuel Poo, certificado de defunción de Urbano Segundo Poo González, José Manuel Poo González; ORD. N°0867 de fecha 30 de noviembre de 2017, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, en virtud del cual se informa referente a la red familiar de la víctima de autos no registra matrimonio ni hijos, Acta de nacimiento de Benedicto Poo Álvarez y Acta



del Matrimonio celebrado entre sus padres), *“en conformidad a la Ley, se deduce el parentesco en calidad de prima de Benedicto Poo Álvarez”*.

**QUINTO:** Que, en cuanto al primer capítulo del recurso, resulta conveniente realizar un análisis de Ley N° 19.123, la cual, en concepto del recurrente, establece beneficios pecuniarios para los familiares de víctimas de derechos humanos cuyo objetivo sería el de indemnizar justamente el daño por ellas sufrido a consecuencia de actos lesivos desarrollados por agentes del Estado.

Lo anterior importa determinar la naturaleza jurídica de los beneficios contemplados en la referida ley para, luego de ello, verificar si concurren los supuestos del pago.

**SEXTO:** Que la historia fidedigna de la Ley N° 19.123, en cuanto elemento de interpretación de la ley según lo dispone el inciso segundo del artículo 19 del Código Civil, pone de manifiesto que durante la tramitación parlamentaria el debate fue justamente sobre la conceptualización y determinación de la naturaleza jurídica de los beneficios pecuniarios que se otorgarían por medio de ella.

Expuso el Senador Máximo Pacheco, refiriéndose a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que *“entendió por reparación un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia del informe. La reparación ha de convocar a toda la sociedad chilena; ha de ser un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas. El proceso de reparación supone el coraje de enfrentar la verdad y la realización de justicia; requiere de generosidad para reconocer las*





*faltas y de actitudes de perdón para llegar al reencuentro de los chilenos. Es verdad que la desaparición de o la muerte de un ser querido constituyen pérdidas irreparables; por lo que no es posible establecer una correlación entre el dolor, la impotencia y las esperanzas de las víctimas, con las medidas que se proponen. No obstante ello, la reparación moral como material, parece ser una tarea absolutamente necesaria para el afianzamiento de una democracia plena”.*

Por su parte, interviniendo el Ministro de Estado señor Correa, a la época Secretario General de Gobierno, expresó que *“El informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, concordante con el mandato del Presidente de la República, presentó al país el cuadro de una situación desgarradora (...) y ha informado (...) del dolor de todos, sin mirar el color de los que murieron por violaciones a los derechos humanos y de quienes murieron por violencia política”* y agregó que *“El reconocimiento de responsabilidades, la administración de justicia por tribunales competentes –de acuerdo a la ley vigente- y la reparación parcial del daño, son las obligaciones que han debido asumir –y deben seguir haciéndolo- los Poderes Públicos y las dirigencias políticas, sociales, religiosas y humanitarias. El proyecto de ley que hoy se somete a la consideración de la Sala se inscribe en ese propósito. Por un lado establece compensaciones y pensiones para los familiares directos de las víctimas y, por otro, encarga a una corporación de alto nivel, designada por el Presidente de la República y con acuerdo del Senado, el cumplimiento, por un tiempo fijo, de las labores de asistencia y apoyo a aquéllos, así como de la ejecución de las recomendaciones de la propia Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en orden a complementar antecedentes en los casos en los que ella no se formó convicción”.*



Es en este contexto, tal como lo exponen las autoridades citadas, que se presenta el proyecto de ley que termina siendo aprobado y que crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y establece beneficios a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

**SÉPTIMO:** Que la ley en análisis establece una pensión mensual de reparación, en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política (artículo 17), pensión que tiene fijada por ley el monto y los beneficiarios, los que por lo demás son desagregados según sea la vinculación que tengan con la víctima y su edad, instituyendo beneficios médicos (artículo 28) y educacionales (artículos 29, 30 y 31), entre otros.

**OCTAVO:** Que de lo referido en la historia fidedigna de la ley, sumado a las características de los beneficios que ella otorga, es posible concluir que no se trata de una reparación total al daño sufrido por las víctimas, sino de una política asistencial desarrollada por el Estado de Chile respecto de los familiares de las víctimas, conceptualización que permite entender los beneficios que se conceden, como por ejemplo los relacionados con educación y salud, los que quedan supeditados a condiciones objetivas para su goce, como lo es la edad y el hecho de estar o no cursando estudios superiores.

Consecuencia de lo reseñado es que los beneficios pecuniarios que contempla la Ley N° 19.123 tienen una naturaleza asistencial y por ende no privan a las víctimas y sus familiares de instar por la reparación efectiva de todo daño sufrido.

Por lo demás, la normativa invocada por el Fisco no contempla en su texto incompatibilidad alguna con la indemnización que en este proceso civil se persigue



y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata, como se dejó asentando en los párrafos precedentes, de formas distintas de reparación y, el que las asuma el Estado voluntariamente no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley, pues de otra manera sería aceptar que el responsable del daño sea quien fije la cuantía de la indemnización a pagar.

Tampoco puede aceptarse la alegación del Fisco de Chile de declarar improcedente la indemnización que se ha demandado en razón de que los actores ya fueran indemnizados por el mismo hecho en virtud de la Ley N° 19.123, pues esa pretensión contradice lo dispuesto en la normativa internacional atinente a la materia, que busca precisamente obtener la íntegra reparación de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado, resarcimiento que encuentra su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política.

Así, por lo demás, lo ha sostenido esta Corte en el pronunciamiento Rol N° 23.441-2014, de fecha 28 de abril de 2015.

Por estas consideraciones, el primer grupo de infracciones denunciadas en el recurso, serán desestimadas.

**NOVENO:** Que, en cuanto a la presunta transgresión de los artículos 27, 305, 309 y 1698 del Código Civil, cabe hacer presente que tal como esta Corte ha señalado con anterioridad, los hechos asentados por los jueces del fondo son



inamovibles, a menos que el recurrente haya denunciado infracción a las normas reguladoras de la prueba, es decir desatendiendo aquellas reglas básicas que contienen deberes, prohibiciones o limitaciones impuestas a los jueces en torno a la apreciación de la prueba.

En este sentido, se entienden vulneradas las normas reguladoras de la prueba cuando los sentenciadores invierten el onus probandi, rechazan pruebas que la ley admite, aceptan medios que la ley rechaza, desconocen el valor probatorio de las producidas en la causa no obstante asignarles la ley uno de carácter obligatorio, y/o alteran el orden de precedencia que la propia ley les otorga.

Como se advierte, los artículos 305 y 309 del Código Civil cuya infracción se denuncia en el recurso, comparten la naturaleza de normas reguladora de la prueba, desde que contienen deberes, limitaciones o prohibiciones a que deben sujetarse los juzgadores para tener por acreditado el estado civil de hijo, padre o madre, y con ello, el vínculo de parentesco en que se cimienta la acción indemnizatoria interpuesta.

**DÉCIMO:** Que, habiéndose sustentado la legitimación para demandar, en la calidad de prima en segundo grado respecto de don Benedicto Poo Álvarez, esto es, invocando parentesco por consanguinidad en línea colateral de sexto grado, conforme lo dispone el artículo 27 del Código Civil, correspondía a la demandante acreditar con las respectivas partidas de nacimiento o instrumentos públicos auténticos, no solo la identidad de sus padres y los padres de éstos, sino que además, debía demostrar que estos últimos son hijos de Adolf Boo y Fridolina Jager, lo que no ocurrió. Por otra parte, la actora tampoco acreditó en la forma ya



anotada, quienes eran los abuelos de don Benedicto Poo Álvarez y que éstos últimos también eran hijos de Adolf Boo y Fridolina Jager.

En efecto, los certificados de nacimiento, certificados de defunción y acta de matrimonio de los padres de la víctima que fueron acompañados al proceso, sólo alcanzan para acreditar legalmente la identidad de los abuelos de la demandante y hasta los padres de la víctima, no existiendo medios de prueba, en los términos exigidos en los artículos 305 y 309, que demuestren que la demandante y la víctima del ilícito penal, provienen de un ascendiente en común, que según la actora, sería el bisabuelo paterno.

**UNDÉCIMO:** Que, no obstante la deficiencia probatoria antes anotada, en el fallo objetado los jueces dejan asentado que la prueba aportada en autos resultó suficiente para probar el referido vínculo de parentesco, desatendiendo de esa forma lo previsto en el artículo 305 del Código Civil, en cuanto disponen – como se señaló- que la manera de acreditar el estado civil de padre, madre o hijo, es con las respectivas partidas de nacimiento o bautismo o, en su caso, por la correspondiente inscripción o subinscripción del acto de reconocimiento o del fallo judicial que determina la filiación, todos, medios de prueba que no fueron acompañados completamente en autos .

A este respecto, no resulta suficiente la documental agregada, pues no se acompañó al proceso las respectivas partidas de nacimiento, matrimonio o documento público auténtico con el que se comprobara que Adolf Boo y Fridolina Jager son padres de Urbano Boo, abuelo de la demandante, como tampoco se acreditó que aquellos eran también padres de José Boo y que éste era a su vez el progenitor de José Manuel Poo, padre de don Benedicto Poo Álvarez, de manera



que no resultó acreditado en juicio, en la forma establecida en el artículo 305 y 309 del Código Civil, el vínculo de parentesco que se invoca en la demanda como fundamento de la acción indemnizatoria intentada.

**UNDÉCIMO:** Que, en esas condiciones, resulta efectivo que los jueces del grado incurrieron en los yerros denunciados al momento de rechazar la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la parte demandada, errores que han influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, desde que en virtud de ellos, el demandado fue erróneamente condenado a pagar a la actora, una indemnización de perjuicios por concepto de daño moral, que se sustentó precisamente en el vínculo de parentesco no acreditado en forma legal, infringiendo con ello, además, lo dispuesto en los artículos 1437, 2314 del Código Civil, 4 y 42 de la Ley 18.575 y 38 de la Constitución Política de la República, de modo tal que el recurso de casación en el fondo será acogido.

Por estas consideraciones y lo previsto en los artículos 767, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, **se acoge** el recurso deducido en lo principal de fojas 1852 por el abogado don Álvaro Saez Willer, en representación del Fisco de Chile, en contra del aspecto civil de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, con fecha doce de enero de dos mil veintidós, que rola a fojas 1850, la que en consecuencia es nula (sólo en su ámbito civil) y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, separadamente y sin nueva vista.

Regístrese.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Letelier.

**Nº 10.055-2022**



Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., Sra. María Teresa Letelier R., y los Abogados Integrantes Sres. Diego Munita L., y Raúl Patricio Fuentes M. No firma el Ministro Sr. Dahm y el Abogado Integrante Sr. Fuentes, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y ausente, respectivamente.

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ  
MINISTRO  
Fecha: 13/01/2023 13:53:37

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER  
RAMIREZ  
MINISTRA  
Fecha: 13/01/2023 13:53:37

DIEGO ANTONIO MUNITA LUCO  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 13/01/2023 13:53:26



En Santiago, a trece de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.





Santiago, trece de enero de dos mil veintitrés.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus considerandos 28° C, D., E., 29°, 30° y 31°, que se suprimen.

Se reproducen los considerandos noveno a undécimo de la sentencia de casación que antecede.

**Y se tiene en su lugar y además presente:**

Que las consideraciones de la sentencia de casación que se han tenido por reproducidas, conducen a acoger la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el Fisco en el escrito de contestación rolante a fojas 1.249 de autos, mismas que imponen aceptar la alegación del demandado de declarar improcedente la acción indemnizatoria impetrada por la actora, pues esa pretensión se sustenta en un vínculo de parentesco por consanguinidad en línea colateral en sexto grado, que no ha sido acreditada legalmente, conforme lo previsto en el artículo 305 y 309 del Código Civil.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 10, 40 y 425 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos 6, 38 y 19 numerales 22 y 24 de la Constitución Política de la República y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se revoca** la sentencia apelada de once de junio de dos mil veintiuno, escrita a fojas 1476 y siguientes, sólo en cuanto por ella se rechazó la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el Fisco de Chile e hizo lugar parcialmente a la demanda deducida en su contra, y, en su lugar, se resuelve que se acoge la referida excepción, desestimándose la demanda en todas sus partes por carecer la actora legitimación para demandar.



Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Letelier.

**Nº 10.055-2022**

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., Sra. María Teresa Letelier R., y los Abogados Integrantes Sres. Diego Munita L., y Raúl Patricio Fuentes M. No firma el Ministro Sr. Dahm y el Abogado Integrante Sr. Fuentes, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y ausente, respectivamente.

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ  
MINISTRO  
Fecha: 13/01/2023 13:53:38

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER  
RAMIREZ  
MINISTRA  
Fecha: 13/01/2023 13:53:39

DIEGO ANTONIO MUNITA LUCO  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 13/01/2023 13:53:28



En Santiago, a trece de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

